



## **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

Decisión No. 197

Medellín, once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022).

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, promovido por **ELIZABETH CASTAÑO MORENO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES**, y la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**

A continuación, la Sala, previa deliberación del asunto, según consta en el Acta No. 050 de discusión de proyectos, adoptado por los integrantes de la sala, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, quien actúa como magistrado ponente, se procede a proferir la decisión de segunda instancia en los siguientes términos:

### **1. ANTECEDENTES**

#### **1.1. HECHOS**

Expone la demandante que nació el 24 de julio de 1960; que se afilió al RPMPD administrado por el ISS desde el 26 de mayo de 1989 donde cotizó 434,29 semanas; que se trasladó al RAIS administrado por COLMENA CESANTÍAS Y PENSIONES hoy AFP PROTECCIÓN S.A. el 18 de junio de 1999; que ha cotizado un total de 1.237,86 semanas a lo largo de toda su vida laboral; que no le fue brindada re asesoría por parte de Protección S.A. al

cumplir los 47 años; que el 27 de junio de 2018 Protección S.A. le realizó una proyección pensional indicándole que a los 58 años tendría derecho a una garantía de pensión mínima, razón por la cual presentó derecho de petición ante Protección el 6 de junio de 2018, solicitando la nulidad e ineficacia de la afiliación, misma solicitud que elevó ante Colpensiones el 7 de junio de 2018.

## **1.2. DE LAS PRETENSIONES**

Con base en los hechos expuestos solicita la demandante se declare la nulidad y/o ineficacia de la afiliación al RAIS y en consecuencia quede sin efectos dicha afiliación, declarándose válida, vigente y sin solución de continuidad la afiliación al RPMPD; que no obtuvo re asesoría antes de cumplir los 47 años; que se declare que COLPENSIONES es quien debe reconocer la pensión de vejez, una vez acredite el requisito de semanas. Que se condene a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES todos los aportes que realizó al RAIS, incluidos los rendimientos y sin descuentos por cuotas de administración, a COLPENSIONES a reactivar su afiliación al RPMPD y recibir los dineros a trasladar; que se condene a COLPENSIONES a pagar la pensión de vejez desde la fecha de causación del derecho, así como los intereses de mora si hay lugar a ello; costas procesales a cargo de las demandadas y lo que resulte probado ultra y extra petita.

Subsidiariamente solicita que se declare que Protección S.A. no le brindo asesoría al momento de trasladarse, ni ante de cumplir los 47 años perdiendo con ello la posibilidad de trasladarse al RPMPD, que se declare y condene que Protección S.A. debe reconocerle a título de indemnización como mesada pensional el valor que recibiría de estar en el RPMPD, que se condene a Protección S.A. a pagarle intereses de mora o indexación de las condenas si a ello hubiera lugar. Costas a cargo de las demandadas, lo que ultra y extra petita resulte probado.

## **1.3 DE LA RESPUESTA**

COLPENSIONES presentó oposición a lo perdido y para su defensa propuso las excepciones de: IMPOSIBILIDAD DE TRASLADO DE RÉGIMEN, IMPROCEDENCIA DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA O INVALIDEZ DEL

TRASLADO, PRESCRIPCIÓN, EQUIVALENCIA DEL AHORRO, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS.

Por su parte PROTECCIÓN S.A., se opuso a lo pretendido y formuló las excepciones de: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN, FALTA DE JURAMENTO ESTIMATORIO DE PERJUICIOS COMO REQUISITO PROCESAL, APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, INNOMINADA O GENÉRICA.

#### **1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

El JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 13 de septiembre de 2020, DECLARÓ la ineficacia de la afiliación de la señora ELIZABETH CASTAÑO MORENO al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por PROTECCIÓN S.A. ORDENÓ a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de ésta providencia, el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo para el efecto las cotizaciones, sumas adicionales de las aseguradoras, con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, incluyendo las cuotas de administración. Ordenó además a COLPENSIONES permitir el traslado. ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de la pretensión encaminada a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez y a PROTECCIÓN S.A. de la encaminada al reconocimiento de la prestación como si hubiera permanecido en el RPMPD. COSTAS a cargo del fondo privado.

#### **1.5. IMPUGNACIÓN**

Presentó recurso de alzada la apoderada de PROTECCIÓN S.A. de manera parcial, frente al numeral segundo de la sentencia en lo que respecta a los descuentos de administración y las cuotas de seguros previsionales, para lo que argumentó que éste descuento opera tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual, y como se probó los aportes de la demandante obtuvieron una ganancia, lo que da cuenta de que los mismos fueron debidamente administrados, por lo que la condena estaría constituyendo un enriquecimiento sin justa causa a favor COLPENSIONES,

por recibir una comisión que ni siquiera está destinado a financiar la pensión de vejez. Continuó manifestando que en razón del artículo 1746 C.C., la consecuencia de la ineficacia es que las cosas vuelvan al estado anterior, y en el caso en concreto en estricto sentido se producirían las siguientes consecuencias, esto es, que el contrato de afiliación nunca existió, la sociedad no administro los recursos de la cuenta individual de la demandante y los rendimientos que produjo dicha cuenta no se causaron y no existió el cobro de una comisión de administración, sin embargo, el artículo 1746 habla las restituciones mutuas intereses frutos y mejoras, y que con base en esto debe entenderse los efectos de la ineficacia de la afiliación, porque no puede desconocer que el bien administrado produjo unos frutos y unas mejoras. Señala por último que debe tenerse en cuenta que frente al cobro del 3% estimado para la comisión de administración opera el fenómeno de la prescripción por ser un concepto del tracto sucesivo, causado por la periodicidad que pone la ley y que además no financia directamente la prestación económica, razones más que suficientes para revocar el punto recurrido.

Como la decisión fue adversa a Colpensiones, se surte el grado jurisdiccional de Consulta en su favor en los puntos no recurridos, como lo ordena el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social

#### **1.6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Dentro del término oportuno, la DEMANDANTE anexó los alegatos de conclusión, solicitando que sea confirmada la sentencia de primera instancia que declara la ineficacia de la afiliación señalando que debe tenerse presente que al momento del traslado no fue brindada una asesoría adecuada que permitiera a la accionante tomar una decisión consiente con las implicaciones a futuro, por lo que no es predicable decir que la afiliación fue de manera libre y voluntaria, para lo cual señalo jurisprudencia la respecto, de acuerdo con el cual el deber de información de los fondos privado aplica para todos los afiliados, y sobre la libertad de consentimiento ha señalado que no basta con la mera firma, porque debe el fondo demostrar que brindo la información adecuada para tomar una decisión de manera consiente, lo que no fue probado.

Por su parte el abogado de COLPENSIONES allegó alegatos de conclusión, en los cuales solicita sea revocada la sentencia para lo cual argumento que

la demandante se encuentra inmersa en la prohibición legal para acceder al traslado de régimen, pues se encuentra a menos de 10 años de la edad para adquirir su pensión, que no puede predicarse que en el caso concreto haya existido un vicio en el consentimiento del cual se derive la invalidez del acto de afiliación, en tanto no existía a la época del traslado obligación más allá del diligenciamiento del formulario para predicarse la voluntariedad del acto de traslado, por lo que no pueden imponerse cargas adicionales a las establecidas legalmente para la época. Manifestó que existen actos de permanencia que no pueden ser desconocidos como prueba, y por tanto el acto de traslado debe considerarse válidamente constituido.

Respecto a la negativa a conceder la pensión solicita se confirme este punto de la sentencia, teniendo en cuenta que no está debidamente probado el cumplimiento de los requisitos para acceder a dicha prestación, por lo que solicita se revoque la sentencia y se absuelva a su representada COLPENSIONES de las condenas impuestas.

## **2. CONSIDERACIONES**

Procede la Sala de Decisión a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por PROTECCIÓN S.A., advirtiéndole que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el estudio del fallo recurrido se limitará a los puntos de inconformidad, así mismo, se hará un estudio de manera general por el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES.

### **2.1. PROBLEMA JURÍDICO**

Esta Sala se ocupará de analizar en primer lugar, en el grado jurisdiccional de consulta, si hay cabida a la declaratoria de la ineficacia del traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad, con el consecuente regreso al régimen de Prima media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES con el traslado de todos los valores que integran la cuenta de ahorro individual.

### **2.2. HECHOS PROBADOS.**

Se tiene probado en el proceso que la señora ELIZABETH CASTAÑO MORENO, nació el 24 de julio de 1962 (01Expediente.pdf – folios 173-194);

que se afilió al Régimen de Prima Media administrado por el ISS a partir del 26 de mayo de 1.989; donde permaneció hasta el año de 1999 , como se aprecia en la historia laboral (01Expediente.pdf – flo 29, 34 a 41 106 a 114, 135 a 139); que en el mes de agosto de 1999 suscribió formulario de afiliación ante COLMENA Cesantías y Pensiones hoy PROTECCIÓN S.A., fondo en el que se encuentra suscrita en la actualidad (01Expediente.pdf – flo 28, 102); que el 06 de junio de 2018, elevó solicitud al fondo privado PROTECCIÓN S.A., buscando su traslado de régimen pensional, así como copia del formulario de afiliación, copia de la re asesoría y demás documentos suministrados al momento de la afiliación (01Expediente.pdf – flo 45 y 46); dando respuesta el fondo privado en comunicado del 27 de junio de 2019, indicando los factores que inciden en la pensión, así como la proyección pensional de su mesada, que sería de la garantía de pensión mínima (01Expediente.pdf – flo 42 a 44, 47 y 48); que el 07 de junio de 2018, presentó la reclamación administrativa ante COLPENSIONES, en aras de retornar a ese régimen pensional, sin que el fondo le haya dado respuesta (01Expediente.pdf – flo 49); por último contamos con la historia laboral consolidada de la actora (01Expediente.pdf – flo 29, 34 a 41, 106 a 114, 135 a 139).

### 2.3. PARÁMETROS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES.

Al ser la indebida información el argumento del demandante para su reclamo, debemos señalar que, a lo largo de los años se ha pronunciado la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia sobre este particular, trayéndose a colación las sentencias del 9 de septiembre de 2008, radicación 31.989, M.P. Dr. Eduardo López Villegas; del 22 de noviembre de 2011, radicación 33.083, del 03 de septiembre de 2014, radicación 46.292, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón y 03 de abril de 2019, radicación No. 68852, M.P. Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, exponiéndose en esta última lo siguiente:

*"En efecto, la jurisprudencia del trabajo ha entendido que la expresión libre y voluntaria del literal b), artículo 13 de la Ley 100 de 1993, necesariamente presupone conocimiento, lo cual solo es posible alcanzar cuando se saben a plenitud las consecuencias de una decisión de esta índole. De esta forma, la Corte ha dicho que no puede alegarse «que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; **de allí que desde el inicio** haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los*

*efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito» (CSJ SL12136-2014)."*

Así que, la AFP La COLMENA HOY PROTECCIÓN S.A. entidad a la cual se trasladó la accionante en el Régimen de Ahorro Individual, tenía la obligación de brindarle a la demandante una asesoría personalizada y completa, debiéndole informar entre otras cosas, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta individual, el número de beneficiarios y la edad de los mismos; la posible redención del bono pensional; la densidad y constancia de los aportes; y que si no se completa el suficiente capital para obtener, por lo menos una pensión mínima (equivalente al 110% del salario mínimo legal vigente, a la fecha de expedición de dicha ley actualizado con el IPC), deberán seguir cotizando; que existen diferentes modalidades pensionales, así como efectuarles las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios futuros en ambas opciones y otras tantas observaciones; reiterándose que la labor del funcionario del fondo debe trascender al "DEBER DEL BUEN CONSEJO" como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, pues al ser la función de las administradoras de pensiones privadas un servicio público a luz del artículo 48 superior, y atendiendo a la sensibilidad social de su rol, se exige de estas un papel activo en la asesoría, mostrándole al afiliado en detalle las ventajas y desventajas del traslado, a fin de que dicha decisión sea realmente pensada, libre y voluntaria, siendo explicado en la línea de la jurisprudencia especializada<sup>1</sup>, que no basta la simple suscripción de un formulario, ni completar espacios vacíos, ni una simple expresión genérica de las condiciones pensionales, pues lo que se echa de menos es el no brindarse una información clara, precisa, comprensible y específica para el caso particular de cada afiliado a fin de que conozca de la mejor manera posible su situación ante el sistema y de esa manera migre al RAIS con plena conciencia de las implicaciones de su decisión.

Ese deber de información a cargo de las administradoras de los fondos de pensiones es ineludible y se impone desde su creación, solo que sus parámetros e intensidad de exigencia dependen de la fecha en que se haya dado la afiliación, por lo que no solo es exigible con la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015, sino que los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, exigían de estas cumplir sus funciones con suma

---

<sup>1</sup> Sentencias de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral SL1688-2019 y SL2030-2019

diligencia, prudencia y pericia, dentro de las cuales se debe entender: *la transparencia, vigilancia, y la información*. Esto, según lo ha dicho la jurisprudencia, a partir del artículo 1603 del Código Civil que enseña que las partes no solo se comprometen en los contratos al cumplimiento de las obligaciones expresas, sino también a las *que emanan de la naturaleza de la obligación*.

#### **2.4. CASO EN CONCRETO.**

En este sentido, si bien el Fondo privado al que se afilió afirmó que a la demandante le brindó la asesoría requerida, de acuerdo con la jurisprudencia reseñada, tenía la carga de acreditarlo, lo que no hizo, ya que ninguna prueba se arrió para demostrarlo, pues tan solo aportó el formulario de afiliación, del cual no puede desprenderse que la vinculación de la actora al régimen de ahorro individual se dio en forma libre, espontánea y sin presiones, porque esa decisión no tiene tal carácter, si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña.

Conforme a lo dicho, la Sala concluye que, el fondo al omitir brindar la debida información, indujo a la hoy demandante a afiliarse y permanecer al régimen de ahorro individual, desconociendo las implicaciones futuras de esa decisión, debiéndose predicar la ineficacia de dicha vinculación, tal y como lo determinó el juez de Instancia, debiéndose confirmar este punto.

La anterior declaración de la ineficacia del traslado, da lugar a la vinculación automática de la actora al régimen de prima media con prestación definida, retrotrayendo la situación al estado de cosas iniciales, siendo dable afirmar que la señora ELIZABETH CASTAÑO MORENO, se encuentra afiliada desde el inició de su vida laboral al Régimen Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES sin solución de continuidad.

Acorde con ello, al ser Colpensiones la administradora de pensiones que eventualmente tendrá a su cargo el reconocimiento de las prestaciones que puedan causarse en favor de la accionante, resulta acertada la orden impartida de recibir todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual; traslado que debe incluir todos los valores recibidos por la AFP La Colmena hoy Protección S.A. con motivo de la afiliación de la demandante, como: Cotizaciones, descuentos de la garantía de pensión mínima, cuotas de administración, sumas adicionales de la aseguradora, con



todos sus frutos e intereses y los rendimientos sin deducción alguna, acorde a lo que dispone el artículo 1746 del Código Civil y la sentencia del 09 de septiembre de 2008, radicación 31.989, como lo determinó el A quo, debiéndose adicionar éste punto, en el sentido de ordenar la devolución de descuentos de la garantía de pensión mínima y la indexación de este emolumento, junto con las cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora, posición que acoge la sala, en atención a la tesis actual de la jurisprudencia especializada, trayendo a colación la sentencia SL 359-2021 y especialmente la SL 950 de 2022, en la que se reseña:

*"... Por ello, en tratándose de afiliados, la Sala ha adocinado que tal declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones -- debidamente indexados-- con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Criterio que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.*

*En consecuencia, al resolver la consulta a favor de COLPENSIONES habrá de adicionarse el numeral primero del fallo del a quo, en el sentido de que PROTECCIÓN S.A. deberá trasladar a Colpensiones los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual del demandante junto con sus rendimientos. De igual modo, la citada AFP deberá devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos..."*

Y es que la declaratoria de ineficacia tiene efectos ex tunc (desde siempre), y de tal modo, las cosas deben retrotraerse a su estado anterior, como si el acto de afiliación jamás hubiera existido. Por ello, en tratándose de afiliados, se ha adocinado que tal declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, postura que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima (CSJ SL2877-2020, SL3199-2021, SL 4652-2021).

Con ello, se busca no afectar financieramente el régimen de prima media con prestación definida, además de que la H. Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral ha dispuesto que *"Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los*

*deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.”(SL4426-2021), argumentos que conllevan a derruir la alzada del recurrente y a confirmar en este punto la sentencia apelada, debiendo precisarse que las cuotas de administración y las primas de seguros previsionales también deben ser devueltas con cargo a los propios recursos de la AFP privada, pues aun cuando fueron entregados a terceros que los recibieron de buena fe y en el período de afiliación la demandante estuvo cubierta para los riesgos de invalidez y muerte, no son las aseguradoras quienes asumen su reconocimiento por ser terceros ajenos al acto viciado, sino que ello recae en la AFP que incurrió en la omisión y se abstuvo de dar cumplimiento a sus deberes de información frente a los afiliados.*

## **2.5 EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN**

En cuanto a la excepción de prescripción, tenemos que esta no está llamada a prosperar por cuanto la acción que involucra el tema de traslado de régimen pensional guarda relación inescindible con la causación, requisitos y valor de la pensión, por lo cual se debe predicar la imprescriptibilidad de la presente acción, ver al respecto Sentencia SL-1421 de 2019, Radicado No. 56174 de 10 de abril de 2019.

## **2.6 PENSIÓN DE VEJEZ**

Resueltos los puntos objeto de apelación, se continua con la revisión de la sentencia, así que establecida la viabilidad de la permanencia de la actora en el Régimen de Prima Media, sin solución de continuidad a cargo de COLPENSIONES, analizaremos si tiene derecho a la pensión de vejez, debiéndose mirar si es beneficiaria del régimen de transición, siendo esta una prerrogativa en favor de ciertas personas cercanas a adquirir el derecho a pensionarse, teniendo una expectativa que en su momento se quiso proteger.

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, determinó que las personas que al 1 de abril de 1994 tuvieran 40 años de edad si son hombres, o 35 si son

mujeres, o 15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones, gozaban del régimen de transición pensional, respetándose las condiciones de edad, tiempo y monto del régimen anterior al que se encontraban afiliados, en este caso, el artículo 12 de Decreto 758 de 1990.

Del material aportado al proceso, tenemos que la señora ELIZABETH CASTAÑO MORENO nació el 24 de julio de 1962, cumpliendo 55 años los mismos día y mes de 2017, lo cual indica al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 1 de abril de 1994, contaba con 31 años de edad. En cuanto a las semanas cotizadas para la citada data, conforme a la historia laboral inserta en el archivo denominado "01. EXPEDIENTE FISICO folio 34 a 41, 106 a 114, 135 a 139" tenía **197,15** que equivalen a **3 años y 8 meses** aproximadamente, lo que nos lleva a concluir que no es beneficiaria del régimen de transición.

Así las cosas, la prestación debe estudiarse bajo los requisitos del sistema general de pensiones, del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la ley 797 de 2003, el cual exige como requisitos los siguientes:

**"Artículo 9º.** *Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:*

*1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.*

*A partir del 1º de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.*

*2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.*

*A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015..."*

Concluye este cuerpo colegiado que la accionante cumplió 57 años, el 24 de julio de 2017, contando con 1.282 semanas, como se desprende del reporte del estado de cuenta del afiliado más actualizada, aportada por el fondo de pensiones Protección S.A., al responder la demanda (1. Expediente físico fls. 106 a 113), sin embargo, no obra prueba en el expediente que permita dilucidar que a la fecha la actora haya consolidado este requisito de las semanas, a sabiendas que sobre ella recae la carga de la prueba de conformidad a reglado en los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso aplicable por remisión del 145 del CPT y la SS, no siendo dable predicar que le asiste derecho a la pensión de vejez, tal y como lo determinó la A quo, lo que nos llevará a confirmar la decisión de primera

instancia, adicionado lo concerniente a la devolución de descuentos de la garantía de pensión mínima y la indexación de este emolumento, junto con las cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora.

Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A. y a favor de la demandante. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000

### 3. FALLO DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**PRIMERO:** Se **ADICIONA** el numeral **SEGUNDO**, y se **ORDENA** a la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, a trasladar a **COLPENSIONES** debidamente indexados, los valores descontados por concepto de cuotas de administración, seguros previsionales y los descuentos para el fondo de garantía de pensión mínima.

**SEGUNDO:** En lo demás se **CONFIRMAR** la sentencia.

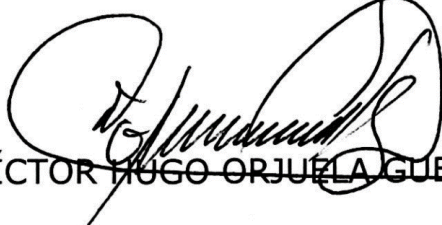
**TERCERO:** Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y a favor de la demandante. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

Lo decidido se notifica por EDICTO.

Los Magistrados,



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE